

**ACUERDO No.
Junio de 2021**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE INCORPORA
AL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL”**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ALCANCE Y PROPOSITO DEL ACUERDO

Mediante Ley 418 de 1997 prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 dieron los lineamientos para la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, FONSET.

Posteriormente, la Ley 1421 de 2010 en su artículo 8°, creó la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, destinada a financiar los FONSET. Esta Ley fue reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 399 de 2011.

Que la preservación y mantenimiento del orden público, así como la seguridad y convivencia ciudadana son funciones prioritarias del orden nacional, departamental y municipal, de allí que es un deber de la Nación y de los entes territoriales velar porque los recursos del FONSET se asignen de manera adecuada, y contribuyan de manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la recuperación del orden público.

El Gobierno Nacional ha decidido establecer a través del Decreto 399 de 2011, una única Política y Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con objetivos, ejes estratégicos y líneas de acción, para orientar y articular las acciones del Gobierno Nacional con las de las entidades territoriales, bajo la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Que el artículo 16 del Decreto 399 de 2011, dispuso las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, indicando para ello, que, en cada departamento, distrito o municipio, el gobernador o alcalde respectivo deberá formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial.

Esta política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público.

El Decreto 399 de 2011 dispuso en artículo 15, que la asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana se deben destinar prioritariamente a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la Política Integral de Seguridad

y Convivencia Ciudadana Territorial, la cual deberá articularse con la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional.

En este mismo artículo, se dispuso que el FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar el 1,50/o del Plan Anual de Inversiones definido por el respectivo gobernador o alcalde.

2. MARCO NORMATIVO

Con fundamento en las consideraciones antes descritas, y atendiendo que el presente Proyecto de acuerdo tiene como fundamento imponer la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana para con ello dotar a la Administración Distrital de Santiago de Cali de recursos económicos con los cuales pueda ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el mismo tiene su fuente en lo consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política Nacional, además de lo consagrado en el artículo 300 ibídem.

En la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, el concepto de orden público que hasta entonces era utilizado para definir una serie de situaciones que atentaban contra la seguridad del Estado, se extendió a otros ámbitos como la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana (Art. 213). Constitucionalmente el concepto de convivencia ciudadana reorientó la mirada y acción del Estado hacia la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, sin excluir la seguridad de las instituciones.

Según el artículo 296 de la Constitución Política, en Colombia existe una jerarquía para el manejo del orden público que se expresa de manera literal de la siguiente manera:

"Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes".

La Ley 62 de 1993, en su artículo 16, define las siguientes atribuciones y obligaciones, entre otras, para los gobernadores y alcaldes en relación con los comandantes de policía.

"11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto".

Que de conformidad con el numeral 4o del artículo 313 de la Constitución Política, se establece que *Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.*

Ley 418 de 1997, modificada, prorrogada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, reglamentada por los decretos 399 y 577 de 2011,

crean la tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

NORMATIVIDAD

ley 1421 diciembre de 2010. "POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA LEY 418 DE 1997 PRORROGADA Y MODIFICADA POR LAS LEYES 548 DE 1999, 782 DE 2002 Y 1106 DE 2006"

Artículo 7o. El artículo 122 de la Ley 418 de 19971 prorrogado por la Ley 548 de 1999 y modificado por la Ley 782 de 2002, quedará así:

“Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial. en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones. compra de equipo de comunicación, compra de terrenos1 montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público”.

Artículo 8o. APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOS-CUENTA TERRITORIALES. Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio.

Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

PARÁGRAFO Los comités territoriales de orden público aprobarán y efectuarán el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad y convivencia ciudadana, así como las partidas especiales que destinen a estos los gobernadores y alcaldes.

los Alcaldes y Gobernadores deberán presentar al Ministerio del Interior y de Justicia informes anuales con la ejecución presupuesta! de los respectivos fondos cuentas territoriales de seguridad.

El inciso segundo del presente artículo no estará sometido a la vigencia de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que conservará un carácter permanente.

DECRETO 399 DE 2011 "Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones"

Artículo 13 del Decreto 399 de 2011 modificado por el artículo 1o del Decreto 577 de 2011. "Imposición de tasas y sobretasas. "Para efectos de la imposición de tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, el recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de origen distrital o municipal será destinado exclusivamente al Fondo Territorial de Seguridad Distrital o Municipal correspondiente. En el evento en que la asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador del nivel distrital o municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta distrital o municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad del mismo gravamen, es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial un mismo hecho generador, a cargo de un mismo sujeto pasivo".

LEY 1738 DE 2014. "POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA LEY 418 DE 1997, PRORROGADA Y MODIFICADA POR LAS LEYES 548 DE 1999, 782 DE 2002, 1106 DE 2006 Y 1421 DE 2010

Artículo 8. De la vigencia y derogatoria de la ley. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha de su promulgación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y el penúltimo inciso del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.

Parágrafo. No estarán sometidos a la vigencia de la presente ley y tendrán una vigencia de carácter permanente los artículos 5o y 6o de la Ley 1106 de 2006, y los artículos 6o y 7o de la Ley 1421 de 2010.

FONDOS TERRITORIALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997 prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, artículo 6, todo municipio y departamento deberá crear un fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de recaudar los aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada ley.

NATURALEZA JURIDICA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONSET

Los FONSET son fondos cuenta y deben ser administrados como una cuenta, especial sin personería jurídica. Serán administrados por el Gobernador o Alcalde, según el caso, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno, o quien haga sus veces según el artículo 119 de la ley 418 de 1997.

ASIGNACION DE RECURSOS DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Los recursos de los FONSET se deben destinar prioritariamente a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (Artículo 119 de la ley 418 de 1997), la cual deberá articularse con la política y estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana (Artículo 4 del Decreto Nacional 399 de 2011)

El FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos logísticos y de administración que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnósticos, diseños, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones definido por el respectivo Gobernador o Alcalde.

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Según la normatividad vigente al respecto ha definido que “El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana -PICSC- “es un instrumento de planeación y control, elaborado de manera conjunta por las autoridades político-administrativas y las agencias de seguridad y justicia, que laboran en jurisdicción del departamento, en concordancia con los lineamientos nacionales.

El -PICSC- es el punto de referencia de todos los procesos de gestión pública en Convivencia y Seguridad Ciudadana, ya que articula y delimita la acción del Estado a nivel territorial, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución, la ley y el reglamento.

COMITES TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO

En cada departamento, distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos

apropiados para los FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento o municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o su delegado, el Comandante de la Policía, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía

General de la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá. (Artículo 17 Decreto Nacional 399 de 2011)

FUNCIONES DE LOS COMITES DE ORDEN PÚBLICO

Son funciones de estos Comités:

1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional.
2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo establecido en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana.
4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.
5. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar seguimiento al mismo.

Así las cosas se puede decir que la gestión de la seguridad, puede afirmarse corresponde a la coordinación de todo el aparato estatal puntualmente ejecutada en la Rama Ejecutiva del poder público quienes desempeña un papel fundamental, ya la Constitución le otorga como facultad y obligación al Presidente de la República, la dirección de la fuerza pública y la garantía del Orden Público en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la Rama Ejecutiva no es comprendida exclusivamente por la figura del Presidente, sino que como es bien sabido esta se divide por niveles atendiendo al

esquema de ordenamiento territorial. En este sentido, y hasta el desarrollo vigente en la materia, se dispone de tres niveles principales, a saber, el nivel nacional, regional y municipal.

Como se señaló anteriormente y distinto a los demás asuntos propios del Gobierno, en materia de Orden Público, la relación existente entre los distintos niveles de gobierno es de jerarquía por expresa disposición Constitucional, razón por la cual, los niveles inferiores al del Presidente de la República actuarán como agentes del mismo, y sus instrucciones y órdenes deberán ser aplicados con prioridad sobre las de los Gobernadores y la de los Alcaldes respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, las funciones del Alcalde, en su calidad de ordenador del gasto serán las de actuar como agente del Presidente de la República para el mantenimiento de la Seguridad Integral en todo el territorio Distrital.

Esto bajo de sus obligaciones de cumplir y haciendo cumplir la Constitución, las leyes y demás normas, ya que la garantía de la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio es la condición necesaria para lograr la protección de todos los habitantes.

CONTEXTO DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Los homicidios y los hurtos son los delitos de mayor alto impacto en Cali, con cifras que ni la pandemia del covid – 19 pudo reducir: 1078 personas fueron asesinadas en 2020, apenas un 4,3 % menos que en 2019. La tasa de homicidios se ubicó en 47 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la nacional (de 23,31 homicidios por cada 100.000 habitantes). Si se compara con otras ciudades capitales, el panorama es el siguiente:

Bogotá – 13,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Medellín – 14,01 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Frente a los hurtos, en 2020 y pese al confinamiento por el coronavirus, hubo 21.566 denuncias en todas las modalidades de robo, frente a 30.135 de denuncias en 2019, según datos de la Fiscalía.

Este año, de acuerdo con el informe de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, desde el 1 de enero y hasta el 5 de junio en Cali se han registrado 497 homicidios. Y durante el primer trimestre del 2021 hubo 5275 denuncias por hurto, según el mismo observatorio.

La delincuencia común es pan de cada día en la ciudad. Ante la restricción vigente del parrillero hombre, los atracadores atacan a sus víctimas en dos o tres motocicletas, usando muchas veces armas de fuego que se compran libremente.

El panorama deja que en la encuesta de Cali Cómo Vamos, que analiza la percepción de inseguridad, arroja que el 75 % de los ciudadanos dice sentirse inseguro. Y el 59,2 % indicó que fue víctima de robo el año pasado, según el mismo informe de Cali Cómo

Vamos 2020. Entre tanto, la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Dane habla de 65,9 % de los caleños se sienten desprotegidos.

A eso se suma los niveles de impunidad que han causado que la justicia se tome por mano propia. El Índice Global de Impunidad pone a Colombia en el quinto lugar en América Latina, solo detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se pudieron medir. La impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia, el 57 % de los departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y el Valle del Cauca se ubicó en nivel alto de impunidad. En el caso del Valle del Cauca, solo el 33 % de las personas confían en las instituciones de justicia, según el Dane.

Mientras la inseguridad y la percepción de la misma no cede, los recursos de la Secretaría de Seguridad y Justicia se redujeron.

El presupuesto aprobado para 2021 fue de \$54.500 millones, que del total de los recursos distritales solo es el 0,015 % del monto de \$3,6 billones, mientras que otras ciudades como Bogotá y Medellín destinan el 3 % y 4 % respectivamente, es decir, en Cali no alcanzamos ni el 1 % de la inversión”.

Si se revisa el gasto público per cápita de seguridad en las tres ciudades capitales para el otro año será así:

- Cali, de 21 pesos al año por persona el próximo año.
- Medellín, de 77.868 pesos por persona en 2020
- Bogotá, de 89 pesos por persona año 2020

Con todo lo anterior, se presenta a continuación:

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el Artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de las disposiciones vigentes, administrando los recursos y estableciendo los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, el numeral 4° del Artículo 313 de la Constitución, estipula que le corresponde a los Concejos Municipales bajo las directrices de la Constitución y la Ley, votar los tributos y gastos locales.
2. Que el artículo 313 ibídem establece que "Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras publicas. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales (..) 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen."

3. Que el artículo 338 de la carta política dispone que "En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. (...) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo."
4. Que el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia dispone que "El Sistema Tributario se funda en los principios de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad."
5. Que el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 1421 de 2010 estableció: "Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos- cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana."
6. Que con base en las potestades otorgadas al Concejo Municipal, esta corporación está en capacidad y libertad de decretar o no los tributos, así como de realizar modificaciones o derogatorias según el caso.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE INCORPORA
AL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL”**

**EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA**

En uno de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012 bajo la autorización de la ley 1421 de 2010, reglamentada por el Decreto Nacional de 399 de 2011 y el Decreto 577 de 2011,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.-ADOPCIÓN.- Adoptar en el Municipio de Santiago de Cali, la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana creada por el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 1421 de 2010, destinada a financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio- FONSET.

ARTICULO SEGUNDO.-DESTINACIÓN.- Los recursos que se recauden por la aplicación de esta Tasa Especial, serán destinados a los gastos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1421 de 2010 y el artículo 15 del Decreto Nacional 399 de 2011 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

ARTICULO TERCERO.- HECHO GENERADOR.- El hecho generador de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana está constituido por la prestación del servicio público de Seguridad y Convivencia Ciudadana que presta el Distrito Especial de Santiago de Cali y la fuerza pública, organismos de seguridad y Policía Judicial, que operan en el Municipio.

ARTICULO CUARTO. - SUJETO ACTIVO.-El sujeto activo de la Tasa Especial Pro Seguridad Ciudadana es el Distrito Especial de Santiago de Cali, en quien recae todas las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. A través del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia ciudadana

ARTICULO QUINTO.- SUJETO PASIVO.- son sujetos pasivos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los beneficiarios directos o indirectos del Servicio público de Seguridad y Convivencia Ciudadana, quienes lo cancelaran en su condición de usuario del servicio Público de energía eléctrica.

ARTICULO SEXTO.- CAUSACIÓN.- La Tasa Especial que se impone mediante el presente Acuerdo, se causa cuando las personas naturales o Jurídicas que actúan como comercializadoras y/o prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica facturen el consumo de dicho servicio a sus usuarios. La contraprestación del servicio Público de Seguridad y Convivencia Ciudadana se prestará a todos los beneficiarios del mismo en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

ARTICULO SEPTIMO. - BASE GRAVABLE. - : Se determina como base gravable para la tasa Especial de seguridad y convivencia ciudadana, el consumo mensual de energía eléctrica que tengan todos los usuarios del servicio de energía eléctrica con conexión a la red.

ARTICULO OCTAVO. – TARIFA.- Consiste en el porcentaje (%) que se aplicara al valor del consumo de energía eléctrica facturado al sujeto pasivo, en el Distrito Especial de Santiago Cali de conformidad con el tipo de predio suscriptor. Para el calculo de esta tarifa se tiene en cuenta la capacidad de pago, de cada uno de estos usuarios, atendiendo para ello la estratificación socio económica adoptada para el Distrito Especial de Santiago Cali y la actividad productiva o de servicios. Tal como se establece en la siguiente tabla.

TIPO DE PREDIO SUSCRIPTOR	ESTRATO	TARIFA MENSUAL SOBRE CONSUMO
Estrato 1	I	0%
Estrato 2	II	0%
Estrato 3	III	0%
Estrato 4	IV	1,0%
Estrato 5	V	1,7%
Estrato 6	VI	1,7%
Comercial		1,7%
Industrial		1,7%
Especial		1,7%
Oficial-Público		1,0%
Otros		1,7%

Parágrafo 1.- Se establecerán los siguientes topes para los sectores Industrial y comercial:

Industrial: Cuando el consumo del suscriptor en el mes sea mayor a 300.000 kwh-mes, se cobrará un valor fijo equivalente a 1.7 SMMLV mensual, si el consumo es

menor a 300.000 Kwh-mes se cobrará la tarifa porcentual establecida en la anterior tabla.

Comercial: Cuando el consumo del suscriptor en el mes sea mayor a 200.000 Kwh-mes, se cobrará un valor fijo equivalente a 1.4 SMMLV mensual, si el consumo es menor a 200.000 kwh-rnes, se cobrará la tarifa porcentual establecida en la anterior tabla.

Parágrafo 2.- Los estratos 1,2 y 3 estarán exentos del pago de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, al igual que las áreas comunes de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, los usuarios del servicio de energía eléctrica que para su autoconsumo la autogeneren, cogeneren y trigeneren, en lo correspondiente a la autogeneración, cogeneración y trigeneración, los asentamientos de desarrollo incompleto (subnormales).

ARTICULO NOVENO. - LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN Y RECAUDO: Deberán Facturar y recaudar la Tasa Especial que se impone mediante el presente Acuerdo, las personas que en los términos de las Leyes 142 y 143 de 1994 y normas que las reglamentan, modifique, sustituyan o deroguen , actúen como comercializadoras y/o prestadoras del servicio público de energía eléctrica y vendan dicha energía a usuarios regulados y no regulados en el Municipio. Para tal efecto, estas entidades deberán incluir el valor de la Tasa Especial en la facturación que envíen mensualmente o por el periodo correspondiente a sus usuarios.

PARÁGRAFO. En todo caso, el Municipio podrá asumir la liquidación, facturación y recaudo de la Tasa Especial, a través de su Secretaria de Hacienda.

ARTÍCULO DÉCIMO. -REGIMEN TRIBUTARIO-El régimen de administración, fiscalización, discusión, cobro, devoluciones, extinción de la obligación , solidaridad para el pago, acuerdos de pago, intereses, sanciones y demás aspectos procesales de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, será el pertinente en el Estatuto Tributario Municipal para sus rentas.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. SEGUIMIENTO: Para el seguimiento y evaluación de los planes, programas desarrollados con los recursos de la Tasa Especial de Convivencia y Seguridad, se integrará una comisión interinstitucional de seguimiento

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. FACULTADES: Facúltese al Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, para que en un termino de 90 días después de la promulgación, mediante decreto reglamente: La liquidación , facturación, recaudo, cuota de recaudo y pago de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia y la conformación y funcionamiento de la Comisión interinstitucional de seguimiento .



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

De la misma forma, facúltase al Alcalde para que incorpore y adicione los recursos recaudados en virtud de la presente sobretasa en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2020.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- ADICIÓN AL ESTATUTO TRIBUTARIO.-

Incorpórese en el Estatuto Tributario del Distrito Especial de Santiago de Cali el presente Acuerdo.

ARTICULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO.- VIGENCIA.-

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha en la que la Ordenanza No. 530 de 2019 pierda su vigencia es decir, el 27 de diciembre de 2023.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Hemiciclo del Honorable Concejo del Distrito Especial de Santiago de Cali – Valle del Cauca a los xxxx días del mes de xxx de xxx (2021)